

TEMAS ECONÓMICOS

Un deterioro laboral anunciado

Como era previsible, el mercado laboral también sufre el impacto del estancamiento económico. Aunque la evolución de las cifras no parece hacer reaccionar al Gobierno, la situación genera costos importantes para la clase media y los más vulnerables.

A la fecha, la tasa de desempleo promedio (INE) bajo la administración Boric alcanza un 8,4%. El mínimo se registró durante los primeros meses de este gobierno (7,8%). Desde entonces, de los 28 reportes oficiales, solo en seis oportunidades se ha ubicado por debajo del 8%. La cifra más reciente es de 8,9% a nivel país (9,4% entre las mujeres). Son números preocupantes. Incluso comparada con otro gobierno de magro crecimiento económico, la segunda administración Bachelet, la actual situación del mercado laboral parece desmejorada: entre marzo de 2014 y marzo de 2018, la tasa de desempleo promedio fue de 6,7%.

Esta negativa evolución ha sido documentada desde distintas perspectivas. A modo de ejemplo, la tasa de participación laboral (suma de empleados y desempleados sobre la población en edad de trabajar) alcanzó en el trimestre móvil junio-agosto de 2024 un 61,8%, inferior a la reportada en el mismo período de 2019 (antes de la violencia y la pandemia). Por su parte, la tasa de ocupación (total de ocupados sobre población en edad de trabajar) alcanza en la actualidad un 56,3%; cinco años atrás era de 57,9%.

De acuerdo con los datos del INE,

desde 2019 a la fecha se han creado 307 mil empleos. Esto representa un crecimiento de 3,44% en cinco años, cifra que se compara desfavorablemente con el crecimiento de la fuerza de trabajo (4,95%) y el de la población en edad de trabajar (6,41%). Por su parte, el número de desocupados aumentó en casi 171 mil, una expansión del 23,38%. Entre los cesantes (desocupados, pero excluyendo a quienes buscan trabajo por primera vez), el aumento en este quinquenio es de un 30,5%. En el mismo período, el aumento de los inactivos superó las 500 mil personas, un 8,87%.

Pero no solo el estudio de la serie de cinco años ofrece una visión sombría. Las estadísticas de los últimos doce meses también lo hacen, incluso cuando se analizan los que podrían ser considerados logros del actual gobierno.

Según los datos del INE, en los últimos doce meses se han creado 229 mil empleos. La rama de actividad que más ha contribuido es "Comercio al por mayor y menor", con 69,7 mil puestos (un 30% del total). Le sigue "Enseñanza", con 29 mil nuevos puestos (14% del total), muy probablemente asociado a la implementación de los cambios en

nuestro sistema educacional, lo que daría cuenta de una expansión indirecta del empleo financiado con fondos públicos. En tercer lugar, se encuentra "Administración pública y defensa", que, con casi 20 mil nuevos empleos, contribuye con el 9%. Así, considerando estas dos últimas áreas, es posible concluir que un porcentaje importante de los nuevos empleos tiene su origen directa o indirectamente en el Estado.

Otra cifra sugerente es el crecimiento anual de quienes contestan "No sabe/No responde" respecto de la rama en que se desempeñan: más de 38 mil empleados se ubican en esta categoría, un incremento de 85%. Es posible que tal estadística esté asociada a otro fenómeno que ha cobrado relevancia: la informalidad.

Precisamente, una simple descomposición de los referidos 229 mil nuevos puestos de trabajo da cuenta de la precarización del empleo. Mientras la creación de trabajos formales no supera los 89 mil, los informales se elevan por sobre los 140 mil. Esto quiere decir que seis de cada 10 trabajos creados en el último año son informales; entre las mujeres, el análisis arroja cerca de siete empleos informales por cada 10 empleos creados.

Factores responsables y claves para revertir

Dos factores emergen como los principales responsables del deterioro laboral. Evidentemente, el bajo crecimiento económico no ha permitido expandir la creación de empleos de calidad (formales). Las estimaciones de Hacienda para 2024 (2,6%) y 2025 (2,7%) no dan cuenta de un cambio significativo en esta materia, como tampoco las proyecciones del Banco Central sobre PIB tendencial para la siguiente década (por debajo del 2%). Y, considerando además el importante aumento de inmigrantes, un mercado laboral deprimido tendrá que ajustar a la baja las remuneraciones para evitar un aumento del desempleo.

Pero un segundo factor anticipa que

tal ajuste será difícil de implementar: la batería de reformas que han rigidizado el mercado del trabajo. Desde la reforma laboral de la segunda administración Bachelet hasta la reducción de la jornada y otras modificaciones recientes (si bien buscaba resolver un tema importante, el cuestionable diseño de la Ley Karin también tiene el potencial de afectar la contratación), todo ha apuntado a dificultar el empleo formal. A esto se han sumado una visión ideológica que emana desde la Dirección del Trabajo y decisiones del sistema judicial que generan costos a la contratación, más los desincentivos a trabajar que nacen desde el sistema de protección social. Un salario mínimo que ha crecido

muy por encima de la productividad, nuevos proyectos (negociación ramal y reforma de pensiones) y la preocupante —e inconstitucional— inclinación política a utilizar impuestos al trabajo para financiar iniciativas específicas introducen aún más rigideces.

Por lo tanto, lo que reflejan las cifras no es más que un deterioro anunciado y natural del empleo. La ausencia de contención política frente a la ideologizada agenda laboral de este gobierno le está y seguirá costando caro a la clase media. Solo un cambio de rumbo significativo, que se ocupe de los incentivos e ineficiencias de nuestra institucionalidad, podrá empezar a modificar esta situación.